



UNR

FACULTAD DE
HUMANIDADES Y ARTES



Ciclo de Complementación Curricular
de Licenciatura en Traducción en Inglés

**Política lingüística y traducción en el ámbito supranacional.
Los casos Mercosur y Unasur**

Autora: Agustina Casero

Tutora: María Gabriela Piemonti

Presentación de trabajo final: noviembre 2018

Cómo citar este trabajo:

Casero, Agustina (2018). *Política lingüística y traducción en el ámbito supranacional. Los casos Mercosur y Unasur*. Trabajo final del Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Traducción en Inglés, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, nov. 2018. Recuperado de: [insertar link] (u.f.c.: [día/mes/año])

Resumen

El presente trabajo analiza la política y legislación lingüísticas de dos organismos supranacionales sudamericanos (OSS), el Mercosur y la Unasur, en torno a la problemática de la traducción institucional. Para esto, se ha realizado un relevamiento de la normativa vigente mediante la búsqueda de palabras clave (idioma, versión, traductor, intérprete, traducción, etc.) en los repositorios institucionales. A modo de introducción se incluye una sección general sobre la conformación, estructura interna y desarrollo histórico de los OSS para luego atender a los tópicos más específicos de su política y legislación lingüística y la organización y conformación de sus servicios de traducción. La investigación se sostiene en un desarrollo teórico interdisciplinar que incorpora nociones propias de la traductología, la sociolingüística, el derecho y las relaciones internacionales para dar cuenta de la problemática estudiada de forma integral.

Palabras clave: política y legislación lingüística – traducción – Mercosur – Unasur.

Abstract

This paper analyzes the linguistic policy and legislation of two South American supranational bodies, Mercosur and Unasur, traversed by the issue of institutional translation. Therefore, a research on the legislation in force has been made, including a key-words search in the institutional repositories (e.g., language, version, translator, interpreter, translation). The general section on the composition, internal structure and historical development of these supranational bodies is meant as an introduction; the paper then addresses more specific topics such as their linguistic policy and legislation and the configuration of their translation services. This research is substantiated by an interdisciplinary theoretical development that adopts notions proper to translation studies, sociology, law and international relations to account for this issue in a comprehensive manner.

Key words: linguistic policy and legislation – translation – Mercosur – Unasur.

Índice

01.- Delimitación y planteamiento del problema	4
02.- Marco teórico conceptual.....	8
03.- Hipótesis de trabajo	9
04.- Metodología	11
05.- Conformación y estructura del Mercosur y la Unasur	12
06.- Política y legislación lingüística	14
07.- Política y legislación lingüística del Mercosur y la Unasur.....	22
08.- Servicios de traducción	34
09.- Conclusiones	38
10.- Bibliografía	41
11.- Documentos normativos consultados	45

01.- Delimitación y planteamiento del problema

El mundo posmoderno se ve caracterizado por fuertes tendencias hacia la globalización, entendida como un proceso de los últimos cincuenta años por el que se han disminuido o debilitado las fronteras geopolíticas, económicas, sociales y culturales en favor de la circulación transnacional y las relaciones internacionales. Este proceso presenta un enorme desafío para los Estados nacionales, que reconocen la necesidad de conformar bloques mayores con miras a cumplir sus objetivos. Es así que, en las últimas décadas, se ha manifestado cierta inclinación hacia el establecimiento de organismos supranacionales (OS), al tiempo que los Estados dependen, cada vez en mayor medida, de éstos para posicionarse en la escena mundial.

Frente a este panorama, reconocemos la relevancia de un estudio que comprenda la problemática de la política y legislación lingüística de estos organismos y, más específicamente, aquella que se refiera o se relacione, aún si fuera tangencialmente, con la traducción al interior de los mismos.

La cuestión de la traducción institucional se pone de manifiesto porque, al estar los OS integrados por Estados que representan a diferentes comunidades lingüísticas, la comunicación y los intercambios interlingüísticos son parte de su cotidianeidad y actividad. Sin dudas, la traducción se convierte en un elemento esencial posibilitador de esta comunicación tan fundamental para el funcionamiento de las estructuras institucionales. Más tarde veremos que la importancia de la actividad traductora comprende mucho más que esta primera aproximación parcial y simplificada.

Evidentemente, por razones de extensión y para delimitar de manera precisa el objeto de estudio, hemos optado por analizar dos casos puntuales: el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la más reciente Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur). La selección de estos dos procesos de integración de entre el conglomerado de OS que existen en la actualidad a nivel global se debe a varios factores. En primer lugar, a un interés particular por la cuestión del regionalismo y, más específicamente, del regionalismo sudamericano. En segundo, esta investigación se realiza en Argentina, lugar donde trabajamos y ejercemos la profesión de traductor/a. Por lo tanto, estudiaremos dos Organismos Supranacionales Sudamericanos (OSS) de los que Argentina forma parte. Por último, encontramos que en el caso de OS con un mayor

desarrollo histórico e institucional, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), esta problemática ha sido y sigue siendo en la actualidad ampliamente estudiada y existen numerosos antecedentes académicos que la abordan desde distintas perspectivas,¹ así como también extensa información institucional disponible. Sin embargo, a simple vista, no ocurriría lo mismo con los OSS que nos proponemos investigar y, si bien existen algunos desarrollos académicos sobre política lingüística en estos contextos,² encontramos que éstos tratan la problemática de la traducción solo tangencialmente y que las reflexiones en este sentido están lejos de agotarse.

Ahora bien, siguiendo a Bein (2008), la legislación lingüística puede ser clasificada de acuerdo con distintos criterios, por ejemplo, los ámbitos de aplicación u órganos de los que emana, jerarquía, y objeto o temas en los que interviene.

Partiendo de estos criterios, nos interesamos por el análisis de la legislación lingüística vigente en el ámbito supranacional del Mercosur y la Unasur, emanada de los órganos decisorios de estos organismos. En cuanto a la jerarquía, tendremos en cuenta, en el caso del Mercosur, los textos fundacionales (Tratado de Asunción, Protocolo de Ouro Preto, Protocolo Constitutivo y Reglamento del Parlasur), las Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC), las Resoluciones del Grupo del Mercado Común (GMC) y los Actos del Parlamento del Mercosur (PM): Recomendaciones y Decisiones. En el caso de la Unasur, los textos fundacionales (Tratado Constitutivo y Reglamento General), las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno (CJEG), las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores (CMRE), y las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados (CD). Por último, en cuanto al tema de intervención, nos interesarán aquellas normas que se refieran –ya sea directa o indirectamente– a la traducción institucional.

Cuando hablamos de *traducción* nos referimos, en palabras de Hurtado Albir, a:

Un proceso interpretativo y comunicativo que consiste en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua y que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada. (HURTADO ALBIR, 2007:643)

¹ Cfr. Pym (2000, 2001), Tafalla Plana (2010), entre otros.

² Cfr. Contursi (2010), entre otros.

Nos atrevemos a ampliar esta definición argumentando que este proceso se desarrolla también en un contexto político. La traducción en los OS adquiere gran importancia como posibilitadora de la comunicación interlingüística necesaria para construir consenso y entendimiento entre los funcionarios y los representantes de los Estados miembro, pero también como garante de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y del principio de plurilingüismo. En otras palabras, gracias a la traducción institucional los ciudadanos pueden acceder y comprender las decisiones tomadas en el marco de los procesos de integración, que tendrán gran incidencia en sus vidas, así como también acceder y comprender las normas del ordenamiento supranacional. Este punto resulta sumamente relevante ya que, en algunos casos, son normas que incluso llegan a incorporarse a las legislaciones nacionales produciendo reformas internas y adquiriendo un carácter vinculante. Así, por ejemplo:

Las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el Artículo 2 de este Protocolo [el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur] tendrán carácter obligatorio y, cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país. (Mercosur, Protocolo de Ouro Preto, Artículo 42).³

Aun cuando éste no sea el caso, el establecimiento de dicho ordenamiento implica que los Estados, pero también los ciudadanos y pueblos que forman parte de ellos, se convierten en sujetos del derecho internacional.

Lo que es incluso más significativo, la traducción les permite a grupos e individuos participar y contribuir en el debate previo que lleva a la formulación de la legislación, en su propia lengua. El resultado deseado es que los ciudadanos se vuelvan autores de las normas y artífices de las políticas de integración en un contexto democrático, participativo y transparente; y si bien la traducción no es el único factor que trabaja para alcanzar este objetivo, es sin dudas imprescindible en el contexto supranacional y, en definitiva, el que aquí nos interesa.

³ Todas las citas a este texto incluidas en el presente trabajo fueron tomadas de la versión disponible en: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/1104/1/2005_protocoloparlamentomcs_es.pdf (u.f.c.: 12/04/2018)

Volviendo a la definición de Hurtado Albir citada con anterioridad, cabe aclarar que es una concepción más bien amplia de la traducción que no diferencia entre textos escritos y orales. Para los fines prácticos de este trabajo, y en correspondencia con el problema planteado, nos enfocaremos en la actividad, los procesos y los resultados que involucren a ambos. Mientras que, cuando empleemos el término más específico *interpretación* será para referirnos, en el sentido indicado por la misma autora, a la modalidad de traducción de textos orales.⁴

En definitiva, esta investigación es un intento por dar respuesta a interrogantes tales como: ¿qué tipo de políticas lingüísticas sostienen los OSS desde la normativa que los regula: monolingües o plurilingües? ¿Cuáles son sus lenguas oficiales y de trabajo? ¿Todas las lenguas oficiales gozan del mismo estatus y uso? ¿En qué lengua/s se producen los textos originales? ¿Qué se traduce? ¿A qué lengua/s? ¿Quiénes traducen? ¿Qué lugar ocupan la actividad traductora y los servicios de traducción dentro de la estructura institucional? ¿Cómo se componen y organizan estos servicios? Y ¿cómo se manifiestan todas estas cuestiones en la legislación de los OSS? Esta breve enumeración no agota todos los interrogantes posibles pero sí brinda una idea general de cuáles son las preguntas que nos planteamos.

Esperamos que este trabajo contribuya en alguna medida a las escasas reflexiones ya presentes en nuestro medio sobre el papel de la traducción en instituciones tan determinantes para el desarrollo cultural, social y económico de nuestra región sudamericana como son las que nos convocan. Asimismo, aspiramos a ampliar el repertorio disponible sobre este problema para incentivar y contribuir a futuras investigaciones que extiendan y superen la presente. Por último, apuntamos a proporcionar un análisis comparativo y crítico que le permita al lector sacar sus propias conclusiones.

⁴ Cabe mencionar que el ámbito de la traductología, existen otros autores (Viaggio, Seleskovitch, Lederer, etc.) que rechazan la idea de que la interpretación sea una modalidad de la traducción. En cambio, plantean que la interpretación es una actividad independiente de la primera por requerir de capacidades y esfuerzos mentales completamente diferentes.

02.- Marco teórico conceptual

Este proyecto se inscribe en el campo de la sociolingüística en tanto que, aunque reconoce la función comunicativa de la *lengua*⁵ (Jakobson, 1981), rechaza la posibilidad de considerarla un mero vehículo para la transmisión de información y, en cambio, desecha esta noción de corte instrumental al reconocer la función social de la lengua como símbolo de identificación cultural de una comunidad de hablantes dada y como elemento constitutivo de la identidad de quienes la componen.

Siguiendo a Le Page y Tabouret Keller (1985), diremos que es imposible separar la lengua utilizada por un individuo y su identidad como hablante de esa lengua. Por lo tanto, todas las expresiones lingüísticas son, en efecto, actos de identidad. En su lengua, el hablante no solo se constituye como sujeto social y se identifica con un grupo determinado sino que también toma conciencia de su propia identidad. Al tiempo que une a los integrantes de un grupo (incluye), los diferencia de otros grupos que comparten una lengua diferente (excluye).

Partiendo de la noción de que lengua y sociedad están intrínsecamente relacionadas, el interés de este trabajo está puesto en el fenómeno de las políticas lingüísticas por el cual se ponen de relieve las grandes opciones presentes en las relaciones entre lo lingüístico y lo social, particularmente en el ámbito de los OS. Al respecto afirma Calvet:

[...] las relaciones entre lengua(s) y vida social son a la vez problemas de identidades, cultura, economía, desarrollo, problemas a los que no escapa ningún país. (CALVET, 1997:5)

Cualquier intervención consciente sobre una lengua tiene una carga eminentemente social y política, ligada a factores de poder que determinan, entre otras cuestiones, qué lengua se habla, aprende o enseña, qué lengua utilizan los medios masivos de comunicación, qué lengua goza de aceptación o prestigio en ámbitos determinados y, en

⁵ Por “lengua” entendemos un sistema particular de signos orales y/o escritos, cuya especificidad depende de las condiciones políticas, étnicas, religiosas y geográficas de cada conglomerado de hablantes; a diferencia del término “lenguaje” que denota la capacidad humana connatural de representar y comunicar el mundo mediante signos (Cfr. Pinzón Daza, 2005, entre otros).

el contexto de los OS, mediante qué lengua se accede a la información, se participa de los procesos políticos o se accede a los ámbitos institucionales. En efecto, lo prioritario no son las lenguas en sí mismas sino los hablantes y la existencia de un reparto desigual de posibilidades en virtud de sus competencias lingüísticas. En este sentido, Bourdieu (2001) explica que los intercambios lingüísticos son en realidad relaciones de poder simbólico –en ocasiones encubierto– donde existen lenguas y hablantes dominantes y sus contrapartes dominados. En consecuencia, las diferencias lingüísticas se vinculan directamente con las diferencias sociales, políticas y económicas en virtud de posibilidades desiguales de acceso y utilización de la lengua legítima o de prestigio. En palabras del autor:

De hecho, los locutores desprovistos de la competencia legítima quedan excluidos de los universos sociales en que ésta se exige o condenados al silencio.
(BOURDIEU, 2001:29)

03.- Hipótesis de trabajo

Tomando como marco de referencia OS con un largo desarrollo histórico e institucional como son las Naciones Unidas y la Unión Europea, observamos que éstos establecen claramente en su normativa la política lingüística general que sostienen y, más específicamente, la vinculada a la traducción institucional. Ambos adoptan el plurilingüismo⁶ aunque en base a diferentes criterios: la ONU cuenta con seis lenguas oficiales (árabe, chino, inglés, francés, ruso y español), en tanto que actualmente la UE reconoce veinticuatro lenguas oficiales, que se determinan de la siguiente manera: cuando un país ingresa a la Unión decide qué lengua utilizará y si ésta todavía no es oficial del organismo, se incorpora.

En ambos organismos se manifiesta una preocupación por la paridad en el uso y jerarquía de estas lenguas, lo que ha impulsado la aplicación de las más diversas iniciativas, medidas y documentos. Ejemplo de esto son las Normas mínimas para el

⁶ Más adelante, en la sección 06.-*Política y legislación lingüística*, haremos una distinción entre lo que entendemos por plurilingüismo y multilingüismo.

multilingüismo de los sitios web de la ONU,⁷ la designación de un Coordinador para el multilingüismo de la Secretaría General de la ONU, y el establecimiento del Día Europeo de las Lenguas o la Comunicación de la Comisión Europea titulada “Multilingüismo: una ventaja y un compromiso”,⁸ solo por mencionar algunos.

Al margen de que podamos discutir la aplicación real y efectiva de esta política, su manifestación más palpable se evidencia en el ámbito de la traducción institucional donde vastos recursos (humanos y materiales) son asignados a esta actividad que, al mismo tiempo, se enmarca en una amplia estructura institucional. Por ejemplo, cada lengua oficial de la ONU cuenta con su propio servicio de traducción, además de un servicio de traducción del/al alemán financiado exclusivamente por los países de habla germana y una Dependencia de traducciones por contrata.

Al mismo tiempo, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros organismos de la ONU disponen de Servicios de Interpretación a las seis lenguas oficiales durante sus reuniones, en las que normalmente trabajan simultáneamente un total de catorce intérpretes. Por su parte, según datos oficiales, la Dirección General de Traducción de la UE, repartida entre las sedes de Luxemburgo y Bruselas, cuenta con 2500 miembros entre los que encontramos traductores, editores, personal administrativo y técnico, al tiempo que solo en el Parlamento Europeo trabajan 330 intérpretes funcionarios y se encuentran disponibles alrededor de otros 1800 intérpretes externos de reserva. Allí trabajan unos 700 traductores que traducen un promedio de 100.000 páginas al mes.

Antes de desarrollar nuestra hipótesis, cabe aclarar que entendemos que los dos OSS, en primer lugar, no cuentan con el mismo desarrollo institucional que los organismos tomados como referencia (sobre todo en el caso de la Unasur, por su conformación reciente: solo diez años en comparación, por ejemplo, con la ONU, con más de setenta años de historia) y, en segundo lugar, se componen de un número menor de países (especialmente el Mercosur, integrado por solo seis países miembro de los cuales cinco comparten una misma lengua oficial, comparado, por ejemplo, con la UE, con veintiocho países miembro y veinticuatro lenguas oficiales), lo que implicaría otras

⁷ Disponible en <http://www.un.org/es/sections/web-governance/minimum-standards-multilingualism-united-nations-websites/index.html> (u.f.c.: 03/04/2018).

⁸ Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0003> (u.f.c.: 03/04/2018).

necesidades lingüísticas y una dificultad menor a la hora de abordar la problemática de la traducción.

Hechas estas salvedades, nuestra hipótesis general plantea que, en el caso de los OSS estudiados, en principio no existiría un desarrollo normativo de las mismas características ni una preocupación tan visible por definir sus políticas lingüísticas en general y, particularmente, en torno a la problemática de la traducción institucional, factor que repercutiría directamente en el nivel de organización de la actividad traductora al interior de los mismos, en el volumen de recursos humanos y materiales asignados a este fin y en la posibilidad de acceso a la información y de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, entre otros factores.

04.- Metodología

En el presente trabajo elegimos desarrollar un análisis comparativo de la norma del Mercosur y la Unasur en lo que respecta a su política y legislación lingüística en torno a la traducción institucional. En este sentido, deseamos otros tipos de abordaje como puede ser el análisis lingüístico de los textos traducidos, ya que no nos interesa el aspecto formal de la traducción sino las traducciones como objeto social y político y el rol correspondiente de los traductores.

El análisis abarcó los siguientes tópicos: conformación, estructura interna y desarrollo histórico⁹ de los OSS; política y legislación lingüística a partir del análisis de los textos normativos; conformación, recursos y lugar de sus servicios de traducción dentro de la estructura institucional.

Para esto llevamos a cabo un relevamiento de la normativa disponible en los repositorios digitales de ambos OSS:

-Archivo Digital de Unasur: <http://docs.unasursg.org/>

-Búsqueda de Normativa del Mercosur:

<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/4059/2/innova.front/normativa-y-documentos-oficiales>

⁹ Este último solo a modo introductorio, como herramienta para contextualizar al lector poco familiarizado con los OSS, ya que, como fue mencionado, el análisis que se intenta no es uno de carácter histórico.

-Buscador de Actos del Parlamento del Mercosur:

https://www.parlamentomercosur.org/parlasur/2016/templates/buscador_actos.jsp?querypage=0&contentid=13175&site=1&channel=parlasur&anio=2016&cmdaction=search

mediante la búsqueda de las siguientes palabras clave:

idioma/s, idioma/s oficial/es, idioma/s de trabajo,
lengua/s,
versión/es,
traducir, traducción/es,
traductor/es,
interpretar, interpretación/es
intérprete/s.

También realizamos un relevamiento de sus sitios web institucionales en busca de datos oficiales y con el fin de detectar si algunas de las cuestiones que establecen los textos normativos se manifiestan o no en la práctica institucional, por ejemplo, la cuestión de qué documentos e información se encuentran disponibles y en qué lenguas. Es decir, si existe o no una paridad entre las lenguas oficiales en relación a los elementos disponibles en la web.

Desde una perspectiva general, el análisis se apoya en un desarrollo teórico interdisciplinar que incorpora nociones propias de la traductología, la sociolingüística, el derecho y las relaciones internacionales para dar cuenta de la problemática abordada de forma integral.

05.- Conformación y estructura del Mercosur y la Unasur

En las últimas décadas se ha generado una tendencia hacia la integración de los países en bloques mayores frente al desafío de insertarse en una economía mundial globalizada desde una posición geoeconómica consolidada y, como resultado, impulsar su desarrollo económico y social aprovechando las oportunidades que brinda este fenómeno posmoderno. Como consecuencia, los Estados ya no actúan solos frente al

mundo sino que conforman *organismos supranacionales*, entendidos como entidades internacionales a las que los Estados ceden parte de su soberanía y atribuciones de gobierno con el fin de dar respuesta a problemas comunes que superan las fronteras nacionales.¹⁰

El hecho de integrar un OS permite a los Estados miembro presentar una posición estratégica común frente a terceros Estados, en especial, a las grandes potencias, o bien frente a otros espacios plurinacionales con el objetivo de defender sus intereses de una forma más efectiva. Una clara expresión de esta tendencia es el llamado regionalismo, entendido como iniciativas de integración de una cantidad limitada de Estados nacionales basadas en la noción de *región*, que Russett (en Oyarzún Serrano, 2008) delimita en base a tres condiciones: proximidad geográfica; interdependencia (especialmente económico-comercial) y homogeneidad (el hecho de compartir un sistema económico, lengua, religión, historia, etc.). En este sentido:

La integración –en especial en las concepciones dominantes en América Latina– partía de la base de la necesidad de discriminar positivamente a los socios regionales en detrimento de los extrarregionales [...] (DI MASI, 2016:32)

En efecto, el mismo Tratado de Asunción, documento fundacional del Mercosur, reconoce la conformación de grandes bloques económicos a nivel mundial, la importancia de éstos a la hora de insertarse en el mercado internacional y la necesidad de ampliar los mercados nacionales de los países firmantes mediante un proceso de integración, que se define como fundamental para acelerar los procesos nacionales de desarrollo económico. En esta misma línea, el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas afirma que la unión y la conformación de un espacio regional integrado son necesarias para avanzar hacia el desarrollo sostenible y garantizar el bienestar de sus pueblos.

El 26 de marzo de 1991, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el mencionado Tratado de Asunción conformando el Mercado Común del Sur o Mercosur, actualmente integrado también por Venezuela y Bolivia. En términos

¹⁰ Así lo indica el prefijo con raíz latina *supra-* que tiene el significado de “sobre” o “por encima de”.

jurídicos, un mercado común es una forma de integración con personalidad jurídica de Derecho Internacional que:

Consiste en la libre circulación de los factores de producción, el trabajo y el capital, además del establecimiento de un arancel aduanero externo común y de la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias [...] fija un conjunto de disposiciones comunes que se aplican tanto a los Estados como a sus ciudadanos, creando así obligaciones para todos. (LOPRESTI, 1997:8)

Si bien el tratado de Asunción manifiesta la voluntad de unir a los pueblos y mejorar sus condiciones de vida, en este momento fundacional, son los objetivos económicos y comerciales los que ganan relevancia por sobre la dimensión social y cultural de la integración. Esto coincide con la tendencia predominantemente neoliberal de los años 90 en América del Sur, según la cual el crecimiento económico vendría de la mano del libre comercio, la desregulación y la limitación de la intervención estatal en la economía. No es casualidad que el Protocolo de Ouro Preto sobre la estructura institucional del Mercosur estableciera que el Consejo del Mercado Común, su máximo órgano a cargo de la dirección política, estaría integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros de Economía de los Estados parte; a la vez que el Grupo del Mercado Común, su órgano ejecutivo, estaría integrado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Banco Central de cada país. Dicho protocolo también incluye a la Secretaría Administrativa del Mercosur¹¹ en la Estructura Institucional del organismo, como órgano de apoyo operativo y responsable de prestar servicios a los demás órganos.

El carácter dinámico de los procesos de integración impone modificaciones en los bloques y su adaptación a los cambios coyunturales. Es así que, a partir de la década del 2000, con la superación de modelo neoliberal, el paulatino retorno a cierto Estado de bienestar y el reconocimiento de la insuficiencia del esquema previo de integración estrictamente económico-comercial, vemos una marcada tendencia hacia la

¹¹ La Decisión CMC N° 30/02 autorizó a la Secretaría Administrativa a utilizar la denominación "Secretaría del Mercosur". En adelante utilizaremos la segunda denominación cuando nos refiramos a este órgano.

incorporación de nuevas dimensiones y su desarrollo como elementos fundamentales para la integración. Se inaugura así una etapa de profundización de los procesos.

Es en este contexto que se funda la Unión de Naciones Suramericanas o Unasur, un organismo dotado de personalidad jurídica internacional que integran doce países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Fue creada en 2008, aunque su Tratado Constitutivo entró en vigencia recién en marzo de 2011. Su antecesora, la Comunidad Suramericana de Naciones, se había fundado en 2004 con el objetivo de integrar los procesos regionales del Mercosur y la Comunidad Andina (CAN), otro OSS constituido por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Desde sus inicios, este ambicioso proyecto de integración tuvo como eje central una multiplicidad de factores (político, social, cultural, ambiental, etc.) y si bien no desconoció el peso del factor económico –todavía importante, aunque no suficiente–, se planteó objetivos específicos más amplios en vistas a extender los procesos iniciados décadas atrás. Entre estos, se destacan: “la consolidación de una identidad suramericana”, “la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones [...] de los pueblos de la región para el fortalecimiento de sus identidades” y “la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre Unasur y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración” (Unasur, Tratado constitutivo, Artículo 3).¹² En relación con este último objetivo, se previó el establecimiento de mecanismos y canales de información, consulta, seguimiento y discusión de propuestas por parte de los ciudadanos.

La Unasur se organiza en cuatro órganos principales: el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, su órgano máximo; el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; el Consejo de Delegadas y Delegados y la Secretaría General.

Por su parte, frente al contexto regional propiciado por el nuevo decenio, el Mercosur se embarca en una superación del modelo económico-comercial –si bien todavía muy presente– planteando objetivos más amplios, tales como el desarrollo humano pleno, el fin de las asimetrías, la conquista de inclusión social y justicia, la

¹² Todas las citas a este texto incluidas en el presente trabajo fueron tomadas de la versión disponible en: <https://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf> (u.f.c.: 12/04/2018)

defensa de los derechos humanos y del patrimonio cultural e histórico de los pueblos, y el respeto por la diversidad cultural y el pluralismo. Esto se manifiesta en la creación de varios órganos consultivos y auxiliares, por ejemplo, el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos (2009), el Observatorio de la Democracia (2007) y el Instituto Social del Mercosur (2007).

Particularmente, en 2005 se crea el Parlamento del Mercosur o Parlasur, que viene a reemplazar a su antecesora, la Comisión Parlamentaria Conjunta, órgano representativo de los poderes legislativos nacionales, cuyos miembros eran anteriormente designados por los parlamentos nacionales y cuyo principal objetivo era facilitar los procedimientos administrativos para la incorporación de las normas del Mercosur, que así lo requiriesen, a los ordenamientos jurídicos de los Estados parte y la armonización de mismos. El Parlasur mantiene ese objetivo, pero en esta nueva etapa el foco está puesto en:

Promover la participación democrática de los ciudadanos del Bloque en la definición de los rumbos del proceso de integración. (Mercosur, Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) N° 47/08).¹³

A diferencia de su antecesora, sus miembros son elegidos por voto universal, directo y secreto de los ciudadanos de cada Estado miembro y se plantea como un espacio de pluralismo y diversidad para dar legitimidad social, transparencia y representatividad al proceso de integración y a las normas que resultan de éste.

Cabe mencionar que, durante las primeras elecciones de parlamentarios del Mercosur, llevadas a cabo en 2015, se percibió, al menos en Argentina, un gran desconocimiento por parte del electorado respecto de qué se estaba votando y con qué fin. Tómese el anterior como ejemplo de que la voluntad expresada en la legislación debe estar acompañada de medidas concretas para constituirse en algo más que una mera expresión de deseo. Con esto queremos decir que, si bien los objetivos tendientes a lograr una mayor representatividad y una participación real de los ciudadanos son sin duda loables, aún queda un largo camino por recorrer para aceitar los mecanismos que permitirán alcanzar las metas planteadas.

¹³ Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 12/04/2018).

En esta etapa, el Mercosur intenta alejarse del modelo inicial de los noventa, que concentraba la toma de decisiones en los poderes ejecutivos y en algunos funcionarios designados, y se abre un nuevo campo para el involucramiento ciudadano en el proceso de integración, al menos a nivel normativo.

En ambos procesos, tanto el correspondiente a la Unasur como a la etapa última del Mercosur, se aspira a la conformación de una identidad colectiva regional que supere las fronteras nacionales, respete las diferencias y celebre la pluriculturalidad para posibilitar formas de participación amplias y, en definitiva, una nueva ciudadanía. Sin dudas, la/s lengua/s y su papel en estos procesos se vuelven determinantes.

06- Política y legislación lingüística

Como bien nos recuerda Hamel (en Calvet, 1997:32) las políticas lingüísticas:

[...] han existido desde que los seres humanos se han organizado en sociedad y extendido sus relaciones de contacto, intercambio y dominación hacia otras sociedades cultural y lingüísticamente diferentes. (en CALVET, 1997:32)

No obstante, el término comenzó a utilizarse recién a partir de la segunda mitad del siglo XX, en coincidencia con el desarrollo de la sociolingüística como disciplina. En los primeros años, parecía que este impulso teórico nacía en respuesta a los problemas de las sociedades poscoloniales, de los países “en vías de desarrollo” o bien de las minorías lingüísticas. Más tarde, con el avance de la disciplina, se comprendería que la problemática relacionada a la toma de decisiones de poder sobre la lengua se extiende a todas las sociedades del mundo, incluidos también los Estados Unidos y a las principales potencias europeas.

Para los fines de este trabajo, suscribimos a la definición propuesta por Bein, quien entiende por *política lingüística*:

[...] el conjunto de las decisiones que se toman conscientemente con relación al uso público del lenguaje, como la de instituir una lengua como lengua oficial, dotar de escritura una lengua ágrafa, ordenar una reforma ortográfica, fijar una terminología, proteger las lenguas minoritarias, establecer qué lenguas extranjeras

se deben enseñar en el sistema escolar público, [...] garantizarle a alguien que no conoce la lengua oficial un intérprete en los juzgados u obligar a los locutores provinciales de radio y televisión a usar el estándar de la capital. (BEIN, 2008:01)

A lo que podemos agregar las decisiones respecto de qué se traduce y qué no, quién traduce qué, a qué lenguas y quién decide sobre estas cuestiones.

En tanto que Kloss (en Calvet, 1997) propone distinguir entre las decisiones que afectan al *corpus* de la lengua y las que afectan su *status*. *Corpus* refiere a la forma de la lengua: su ortografía, sintaxis, léxico, estandarización o normalización, “modernización”, etc. En tanto que *status* refiere a las funciones de la lengua: jerarquía, oficialización o grado de reconocimiento, relación con otras lenguas, asignación de funciones (como la de ser la lengua de enseñanza o la utilizada por los medios masivos de comunicación), protección de lenguas minoritarias, etc. Esta investigación se ocupa de las segundas.

Por otra parte, Bein (2008) entiende a la *legislación lingüística* como una herramienta fundamental de la política lingüística y la define como cualquier legislación que se refiera ya sea de forma directa o indirecta, exclusiva o parcial al uso, defensa o prohibición y enseñanza de las lenguas, así como a los derechos y obligaciones relacionados.

Por su parte, Tafalla Plana (2010) plantea que existen tendencias predominantes en las que es posible ubicar a los diferentes OS en base a sus políticas lingüísticas. Dichas tendencias coinciden con dos maneras muy diferentes de considerar la lengua. La primera alternativa hace una lectura instrumental de la lengua, es decir, pone el acento en su capacidad o función comunicativa; mientras que la segunda –como adelantamos en la sección 02.-*Marco teórico conceptual*– considera el valor simbólico de la lengua como marcador de la identidad individual y colectiva de los hablantes.

Así nos encontramos, por un lado, con el *monolingüismo*, es decir, el uso de una única lengua para la comunicación y el trabajo al interior de los organismos. En el pasado el francés era la lengua utilizada por excelencia para los actos diplomáticos. Más actualmente, el inglés ha llegado a ocupar esa posición por su predominio como lengua internacional.

Los defensores de monolingüismo sostienen que para lograr una mayor eficacia comunicativa es mejor atenerse a una única lengua franca. La opción aquí es la

practicidad y la reducción de costos. Un dato no menor es que los OS con prácticas monolingües pueden prescindir casi completamente de servicios de traducción, cuyos costos y tiempos de entrega se multiplican exponencialmente cada vez que se incorpora una nueva lengua oficial a los OS con prácticas plurilingües. Por ejemplo, un organismo que utilizara cinco lenguas se enfrentaría a un número de veinte combinaciones posibles a la hora de traducir. Más adelante, en la sección *07.-Política y legislación lingüística del Mercosur y la Unasur* veremos que, en la práctica, los organismos con políticas plurilingües aplican medidas que les permiten sortear este escollo.

Por otro lado, el *plurilingüismo* implementa el uso de varias lenguas en el ámbito supranacional. En tanto que los defensores de esta alternativa argumentan que en la mayoría de los países del mundo coexiste más de una lengua y que, en un gran porcentaje de ellos, incluso se habla una multiplicidad de lenguas. Es decir que, a nivel de la comunidad de hablantes, el plurilingüismo se presenta como la regla y no la excepción. A este hecho le suman la convicción de respetar el principio de diversidad lingüística y el derecho humano de las personas y los pueblos a expresarse en su propia lengua.

Cabe aquí introducir la noción de *derecho lingüístico*. Para esto nos valdremos de los instrumentos jurídicos internacionales ya que, por un lado, las legislaciones lingüísticas nacionales difieren de país en país y, por otro, un análisis pormenorizado a nivel nacional de cada uno de los países que integran los OSS excedería largamente el propósito de esta investigación.¹⁴

La construcción de esta noción es parte de un proceso que lleva vigente varias décadas y aun así, hoy en día sigue generando controversia respecto de la naturaleza de estos derechos. Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948¹⁵ prohibía la discriminación de los individuos en base a su lengua y reconocía la libertad de expresión, que –muchos autores consideran– implícitamente contiene el derecho a utilizar la lengua de elección libremente. A éstos se los encuadra en la llamada primera generación de derechos humanos. También se consideran derechos lingüísticos el

¹⁴ Para un estudio de la legislación lingüística de los países que integran el Mercosur véase la investigación del Grupo de Trabajo de Políticas Lingüísticas del Mercosur dirigido por Elvira Narvaja de Arnoux. Disponible en: <http://www.linguasur.com.ar/> (u.f.c. 03/04/2018).

¹⁵ Otros tratados internacionales que incluyen en alguna medida la protección de estos derechos son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica (1969).

derecho a identificarse positivamente con la propia lengua, el derecho de los pueblos a mantener la alteridad e identidad etnolingüística, a la educación en la propia lengua, al uso de la lengua en distintos contextos sociales, y a aprender al menos una de las lenguas oficiales del país de residencia, entre otros. Los que más nos interesan, dado el objeto estudiado, es el derecho a acceder a la información en la propia lengua:

Artículo 17.1. Toda comunidad lingüística tiene derecho a disponer y obtener toda la documentación oficial en su lengua, en forma de papel, informática o cualquier otra, para las relaciones que afecten al territorio donde es propia esta lengua. (Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, Título 2º, Sección).¹⁶

y a utilizarla en ámbitos oficiales:

Artículo 16. Todo miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a relacionarse y a ser atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos o de las divisiones administrativas centrales, territoriales, locales y supraterritoriales a los cuales pertenece el territorio de donde es propia la lengua. (Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, Título 2º, Sección 1).

El papel preponderante de la traducción como posibilitadora de estos derechos se afirma claramente en la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos:¹⁷

Toda comunidad lingüística tiene derecho a gozar de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de los derechos recogidos en esta Declaración. (Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, Título 1º, Artículo 11)

Sin embargo, como anticipamos, la cuestión se complica a la hora de determinar si los derechos lingüísticos constituyen derechos fundamentales y por lo tanto inherentes a

¹⁶ Todas las citas a este texto incluidas en el presente trabajo fueron tomadas de la versión disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001042/104267S.pdf> (u.f.c.: 26/05/2018).

¹⁷ La Declaración fue aprobada en 1996 durante la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos de Barcelona, que contó con el auspicio de la UNESCO y de la que participaron más de cien asociaciones, ONG, instituciones y expertos. Con posterioridad a su aprobación, el texto fue enviado al Director General de la UNESCO, pidiéndole que lo examinara, con miras a su ulterior presentación a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien todavía no ha sido reconocido por Naciones Unidas, es un texto de referencia en la elaboración de legislaciones nacionales y ha abierto nuevos caminos para el reconocimiento y respeto de estos derechos.

las personas por su condición de seres humanos, o bien si pertenecen a los derechos sociales, económicos y culturales, enmarcados en la llamada segunda generación, y que se encuentran por debajo de los primeros. Esta distinción no es menor, ya que en el caso de los derechos fundamentales, el Estado no los crea sino que simplemente los reconoce y pueden ser ejercidos por los individuos, mientras que los segundos deben ser creados por iniciativa estatal y, en el caso de los lingüísticos, no podrían ejercerse sin la presencia de la comunidad de hablantes, es decir que pasarían a considerarse derechos colectivos. Esta ambigüedad tiene como consecuencia que muy pocas legislaciones nacionales los reconozcan explícitamente como derechos fundamentales.

Bigot resume este proceso al indicar que en los instrumentos jurídicos internacionales

se registra una tendencia en el tratamiento de los aspectos lingüísticos que ha ido transitando desde la no discriminación por causas lingüísticas, a la protección de los grupos en riesgo lingüístico-cultural, llegando a la defensa actual de los derechos lingüísticos en el marco de la valoración de la diversidad lingüístico-cultural y la promoción de Estados plurilingües y pluriculturales. Esta evolución se correlaciona con una evolución del sistema internacional de derechos humanos. (BIGOT, 2010:4)

No ahondaremos más en esta cuestión para no desviar el foco de la investigación, aunque sí vale aclarar que el mismo no está puesto en la protección o defensa de las leguas en peligro, en tanto patrimonio de la humanidad, sino en la defensa de los hablantes de esas lenguas, que, como hemos mencionado, frente a la innegable coexistencia de múltiples lenguas en la gran mayoría de los países del mundo –y por consiguiente de lenguas y comunidades lingüísticas dominadas y dominantes– ven amenazados sus derechos.

Volviendo al concepto de plurilingüismo, resta mencionar que adoptamos una definición tomada del análisis histórico de R. E. Hamel (en Mar-Molinero, 2000). El autor se refiere a dos formulaciones ideológicas correspondientes a dos períodos históricos: 1) el multiculturalismo o multilingüismo, que surge en el siglo XX y si bien reconoce dentro del territorio la presencia de comunidades que hablan otras lenguas diferentes de la lengua dominante o “nacional”, las considera un obstáculo para la modernización y por lo tanto, el desafío es asimilarlas, y 2) el pluriculturalismo o

plurilingüismo, que surge también en el siglo XX, aunque con posterioridad, y no solo reconoce la diversidad cultural y lingüística sino que las considera un recurso valioso en pro del enriquecimiento de la sociedad toda.

Los OSS que son objeto de este trabajo optan por este último como vía para alcanzar consenso y unidad en la diversidad, al menos en la letra.

07.- Política y legislación lingüística del Mercosur y la Unasur

En materia de legislación lingüística, el Protocolo de Ouro Preto establece que:

Los idiomas oficiales del Mercosur son el español y el portugués. La versión oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión.
(Protocolo de Ouro Preto, Artículo 43)

En este sentido, Contursi (2010) plantea que en la primera etapa del Mercosur, que ubica a lo largo de la década de 1990, no se profundizó (como mencionamos en secciones anteriores) en las cuestiones lingüísticas y culturales que venían aparejadas a la integración regional. En cambio, se les dio a las lenguas un tratamiento meramente “instrumental” ligado a la producción de los documentos emanados de los órganos propios y a su traducción a la otra lengua oficial para su difusión en el ámbito del Mercado Común. De esta manera, se deja de lado el valor identitario y simbólico de las lenguas al tiempo que se las considera “transparentes”. Es decir que, siguiendo este supuesto, la traducción constituiría un simple trasvase mecánico entre sistemas lingüísticos visiblemente equivalentes que no presenta mayores complicaciones. Esta lectura automaticista (en el sentido más netamente equivalencista de Catford, Vinay, Darbelnet y posteriormente Nida¹⁸; un abordaje que, vale mencionar, ha sido completamente superado) induce a creer que cualquier persona con una competencia lingüística en la lengua extranjera puede traducir sin peligro. Asimismo, detrás de esta idea de lenguas transparentes se esconde la noción por la cual una traducción es aceptable cuando logra ser inmediatamente inteligible para el lector. En otras palabras, se exige que la traducción asimile y naturalice las diferencias lingüísticas y culturales que presenta el original priorizando la fluidez, mientras que, por su parte, el traductor

¹⁸ Cfr. Catford, Vinay y Darbelnet, Nida (en Pym, 2012).

debe aspirar a producir un texto tan transparente que ni siquiera parezca una traducción, es decir, que sea leído como un original.

Venuti (2004) llama a este fenómeno “domesticación” y critica duramente la preferencia por este tipo de traducciones. En efecto, sostiene que detrás de esta “ilusión de transparencia” se ocultan las diversas condiciones en que se produjo la traducción, siendo la más importante el papel del traductor con toda su carga afectiva, emocional e ideológica. Como consecuencia, el traductor y hasta la traducción misma se vuelven invisibles, hecho que resulta inaceptable para Venuti y otros tantos autores (con los que coincidimos en este punto), entre ellos quienes adhieren a la teoría de los polisistemas.¹⁹

Un síntoma de esta “ilusión de transparencia” en el Mercosur se manifiesta en la Resolución del Grupo del Mercado Común (GMC) N° 15/02 sobre la estructura, cargos y funciones de la Secretaría. El documento enumera los requisitos para quienes quisieran ocupar el cargo de Técnico en Normativa bajo la órbita de Sector de Normativa (que en ese entonces era el sector responsable de prestar servicios de traducción). Entre las funciones correspondientes al cargo encontramos la de:

Preparar, en coordinación con los Estados Partes, las traducciones auténticas para los idiomas español y portugués de todas las decisiones adoptadas por los órganos de la estructura institucional del MERCOSUR. (Res. GMC N° 15/02)²⁰

y, sin embargo, el único requisito obligatorio relativo a la competencia lingüística es un mero “dominio de los idiomas español y portugués”.

Continuando con el análisis del desarrollo normativo, en el año 2006, una Decisión del Consejo del Mercado Común incorpora al guaraní²¹ (una de las dos lenguas oficiales de Paraguay y utilizada en otros países miembro, como Argentina, aunque sin estatus de oficialidad) como lengua²² del Mercosur pero al mismo tiempo deja en claro que:

¹⁹ Even-Zohar, Toury, etc. (en Pym, 2012).

²⁰ Ídem nota 13 (u.f.c.: 14/05/2018)

²¹ Previamente, en 1995, durante la II Reunión Especializada de Cultura del Mercosur, los ministros de Educación y Cultura de los países miembro la habían declarado lengua histórica del Mercosur.

²² En los textos normativos, tanto del Mercosur como de la Unasur, encontraremos la denominación equivalente “idioma”, palabra de uso extendido en los códigos. Sin embargo, en este trabajo optamos por utilizar “lengua”, por ser un término propio del campo de la lingüística y la traductología.

Los idiomas de trabajo en el MERCOSUR serán los idiomas oficiales establecidos en el Artículo 46 del Protocolo de Ouro Preto. (Mercosur, Decisión CMC N° 35/06)²³

Es decir que, desde su fundación, son lenguas de trabajo del Mercosur el español y el portugués. Solo recientemente (2014) se incorporó como lengua de trabajo –aunque solo en el ámbito del Parlamento del Mercosur– al guaraní, lo que significó que se incorporara la interpretación simultánea de las sesiones y la traducción plena de los documentos emanados de las mismas al guaraní –al menos como requerimiento normativo–.²⁴ Previamente solo se garantizaba el derecho de los parlamentarios a expresarse en su lengua oficial de preferencia, pero no así los servicios de interpretación simultánea a lengua guaraní, como sí los había en las dos lenguas restantes. Además, se establece que los documentos del Parlasur se publicarán en las tres lenguas.

En tanto que el Tratado Constitutivo de la Unasur reconoce a las naciones que la conforman como multiétnicas, plurilingües y multiculturales. Asimismo establece que:

Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés. (Unasur, Tratado Constitutivo, Artículo 23)

Mientras que sus lenguas de trabajo son el castellano²⁵ y el inglés.

En este punto conviene diferenciar los conceptos de lengua oficial, lengua de trabajo y lengua puente o pivot. Las *lenguas oficiales* son aquellas declaradas como tal

²³ Ídem nota 13 (u.f.c.: 14/05/2018).

²⁴ Esta decisión dio inicio a un proceso administrativo y logístico de incorporación de traductores e intérpretes de/a lengua guaraní, motivo por el que el Parlasur firmó un convenio de cooperación con la Secretaría de Políticas Lingüísticas de la República del Paraguay para que brindara asesoramiento en la selección de los traductores; convenio suscrito en lengua española y guaraní y aprobado por Disposición del Parlamento del Mercosur N° 02/2014. Disponible en <https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/8263/1/disp-02-2014---convenio-marco.pdf> (u.f.c.: 31/10/2018)

²⁵ En el presente trabajo, los términos “español” y “castellano” son utilizados para referirse a la misma lengua sin intención de hacer ningún tipo de distinción ya sea lingüística, geográfica, histórica o política. El uso de ambos términos se debe a que, como ya hemos visto, mientras que la normativa del Mercosur opta por el término “español”, en los textos normativos de Unasur se prefiere la denominación “castellano”. La denominación oficial que se le da a una lengua también constituye una instancia de política lingüística en tanto que, aunque los dos términos denotan lo mismo, sus connotaciones pueden ser muy diferentes. Curiosamente, de los países hispanohablantes que forman parte del Mercosur y la Unasur, encontramos que en las Constituciones de Paraguay, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se utiliza el término “castellano”, mientras que en las de Argentina, Uruguay y Chile no se establece de forma explícita una lengua oficial.

por la normativa de los OS o de los Estados. Esto quiere decir que la legislación y, en general, la mayoría de los documentos oficiales emanados de dichos organismos así como la información pública que difundan, en principio, se encuentran disponibles en todas estas lenguas, al tiempo que los representantes de los diferentes países miembro y las autoridades y funcionarios del organismo pueden expresarse en cualquiera de estas lenguas, ya sea de forma oral o escrita. Además, las traducciones de los textos normativos a las lenguas oficiales se constituyen como textos igualmente “auténticos” en todas sus versiones.²⁶ Así, por ejemplo, el Tratado de Asunción se suscribe “en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos”, y el Tratado Constitutivo de la Unasur se suscribe “en originales en los idiomas portugués, castellano, inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos igualmente auténticos”.

La designación de una lengua particular como oficial en el ámbito de los OS no es para nada casual, sino que constituye un acto político y simbólico de empoderamiento en detrimento de otras lenguas utilizadas en la región, como ya lo manifestaba Pierre Bourdieu (2001). Y esto se produce incluso en casos en que estas lenguas son reconocidas por los propios Estados nacionales, como ocurre con Bolivia, que reconoce en su Constitución 36 lenguas oficiales, entre las que se ubican el español y las lenguas de sus pueblos originarios.

Entre los motivos más recientes por los cuales solo una cantidad reducida de lenguas adquiere este estatus –a pesar de un fundado reconocimiento de la naturaleza plurilingüe de las naciones que conforman los organismos– podemos mencionar el mismo proceso de globalización que impulsa la conformación de los OS. Esta jerarquía lingüística se ve reforzada por procesos económicos que persiguen la creación de

²⁶ La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969 (ratificada por Argentina, Uruguay y Colombia y firmada por Brasil) en su Artículo 33 sobre la Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas establece:

“1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.

2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado”. Texto disponible en https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf (u.f.c.: 12/04/2018).

mercados globales, para lo cual la diversidad lingüística lisa y llanamente resulta muy costosa y demanda mucho tiempo. Se entiende que el acceso y uso de las lenguas internacionales garantiza mayores posibilidades de beneficio económico. Para explicar este fenómeno, Swaan (en Pym, 2012) plantea la existencia de un “sistema mundial de idiomas” intrínsecamente ligado al desarrollo de la globalización. En él existe una jerarquía correspondiente a las relaciones de producción y consumo que ubica en la cima a las llamadas lenguas centrales (encabezadas por un idioma global, el inglés), seguidas de las semicentrales y, por último, las lenguas excluidas. En dicho sistema, la tendencia va de una producción centralizada a un consumo descentralizado, donde las lenguas excluidas quedan relegadas, valga la redundancia. Es decir, del inglés a las lenguas más “importantes” del mundo.

Entre las lenguas excluidas bien podrían incluirse las minoritarias –consideradas como tales muchas veces en términos de poder y no así de cantidad de hablantes: por ejemplo, las lenguas quechuas son utilizadas por casi ocho millones de personas a lo largo de siete países de América del Sur–, cuya marginación, cabe aclarar, es un problema de orden nacional, que solo posteriormente se traslada a la escala supranacional.

Aquí conviene explicitar qué entendemos por *minoría lingüística*, para esto nos valemos de la clasificación que ofrece Bigot (2010). El término puede ser utilizado para designar a: 01.-grupos con características lingüístico-culturales diferentes a las de la sociedad mayoritaria y dominante; 02.-una población dominada políticamente, sin importar su tamaño demográfico (en este caso también es extendido el uso del término “minorización”); 03.-también se define como minoritaria la lengua de grupos numéricamente reducidos o inferiores dentro de un área geográfica definida.

Históricamente el Estado ha sido la fuente principal de políticas lingüísticas –ya sea por acción u omisión– y esto es así, en gran medida, porque es el único con la facultad, el poder y los medios suficientes para aplicarlas efectivamente. Esto no quiere decir que la acción de jurisdicciones subordinadas (por ejemplo, las provincias, las regiones o los estados, dependiendo de qué país se trate), de la sociedad civil (grupos o individuos) o de entidades mayores (OS) no vaya a tener repercusión en la dirección que tomen las políticas lingüísticas de los Estados nacionales. De hecho, como este trabajo intenta exponer, la política lingüística es perfectamente capaz de trascender las fronteras nacionales y esto ocurre en parte porque las lenguas no necesariamente coinciden con

las fronteras: pueden manifestarse en extensiones más pequeñas o bien superar los límites territoriales de un país determinado.

La lengua oficial, tanto a nivel nacional como supranacional, adquiere prestigio y es utilizada en el ámbito público-estatal, judicial, administrativo, entre otros. De esta forma, las demás lenguas quedan relegadas a ciertos ámbitos de la sociedad civil o bien privados. En general, a nivel nacional esta diferencia en el rol asignado a cada lengua se relaciona fuertemente con el lugar que ocupan sus hablantes en la sociedad y con la consideración por parte de la comunidad de que una de sus lenguas es superior o tiene mayor valor que la/s otra/s. Cuando existe un reparto funcional entre dos o más lenguas o variedades en una misma comunidad de hablantes esto se define en términos teóricos como *diglosia*. Si tomamos las categorías de Ferguson (1950) para analizar este fenómeno, diremos que existe una lengua o variedad *alta* y otra *baja*;²⁷ que la primera es habitualmente empleada para el desarrollo de las funciones públicas, la enseñanza oficial y en los intercambios formales, es la lengua de poder y habitualmente disfruta de prestigio a nivel internacional, mientras que la segunda se reserva para los intercambios íntimos o familiares e informales. En la comunidad plurilingüe cada lengua cumple funciones que se consideran inadecuadas para la otra, y éstas pueden llegar a superponerse solo en casos excepcionales. Si bien Ferguson consideraba que la diglosia se presentaba armoniosamente, más tarde teóricos surgidos de contextos diglósicos, como Robert Lafont y Lluís Aracil (en Calvet, 1997), dirán que no existe tal armonía sino que la diglosia es verdaderamente una situación de conflicto en la que hay una lengua dominante y una lengua dominada.

Por su parte Bourdieu (2001), quien desarrolla la problemática de la dominación lingüística en profundidad, afirma que los intercambios lingüísticos constituyen relaciones de poder simbólico. Cuando el Estado declara una lengua oficial se produce un proceso de “unificación” por el que esta lengua es impuesta a los hablantes como la única opción legítima en un territorio dado. Tal proceso se refuerza y reproduce mediante un número de instituciones y mecanismos que establecen la obligatoriedad del uso de la lengua oficial (escuela, administración pública, justicia, etc.) Al tiempo que

²⁷ Charles Ferguson (1950) fue el primer teórico en ofrecer un modelo de análisis sociolingüístico para situaciones plurilingües. Si bien Ferguson consideraba que el fenómeno de la diglosia se restringía a la presencia de dos variedades de la misma lengua en una comunidad de hablantes, más tarde, autores como Fishman (en Calvet, 1997) reformularían el concepto incluyendo también situaciones en las que existiera un reparto definido de funciones entre dos lenguas diferentes.

esta expresión lingüística se constituye en la norma según la cual se “miden” o valoran todas las demás. Es así que la comunidad de hablantes toda –incluso los dominados– llegan a reconocerla universalmente como legítima, y su estatus dominante se naturaliza. Además, y como ya hemos mencionado, Bourdieu concluye que la distribución de la lengua es desigual entre los hablantes, ya que son desiguales las posibilidades de acceso a ésta y, por lo tanto, los individuos que no cuentan con una competencia lingüística aceptable en la “lengua legítima”, esto es, la lengua oficial, son excluidos de los “universos sociales” en los que su uso es requisito obligado. De allí se desprende que las posibilidades desiguales de acceso, uso y conocimiento de la lengua legítima se vinculan directamente con la posición de los hablantes en la sociedad.

En casi todos los países que integran los OSS existen lenguas no oficiales, y en algunos se manifiesta una multiplicidad de lenguas utilizadas por diversas comunidades dentro del territorio nacional. Dicho esto, la mayoría de los países que tratamos reconocen una sola lengua oficial en todo el territorio, a excepción de los ya mencionados casos boliviano y paraguayo.²⁸ Este principio de monolingüismo puede ser rastreado hasta la época colonial, cuando desde los centro de poder europeos se impuso la lengua de los conquistadores y, en muchos casos, la supresión de las lenguas amerindias. Más tarde, iniciados los procesos independentistas y frente al desafío de constituir un nuevo Estado poscolonial, predominó la noción de “un pueblo, una lengua, una nación”, que dio como resultado la instauración de un modelo monolingüe, homogeneizante y hegemónico. La imposición de *una* lengua era afín al objetivo político de conformar una identidad nacional en tiempos en que la manifestación de diversas expresiones culturales y lingüísticas era sinónimo de desunión, disenso y segregación. Esta tendencia política e ideológica se sustentaba en la visión Europea propia de la codificación del siglo XIX,²⁹ por la cual un Estado nación unificado y

²⁸ Cabe mencionar que algunos Estados, como Perú, Ecuador y Venezuela, le otorgan estatus de oficialidad a las lenguas aborígenes pero solo para uso de los pueblos que se identifican con ellas o bien, restringido a ciertas zonas del territorio donde predominan. En otros países, como por ejemplo Argentina, existen jurisdicciones subordinadas al Estado nacional que reconocen algunas lenguas aborígenes como oficiales. Las provincias argentinas de Corrientes y Chaco han declarado como lenguas co-oficiales junto con el español al guaraní, y al mocoví, qom y wichí respectivamente. Sin embargo, en todos los casos el español cuenta con una jerarquía superior en el ámbito público-estatal.

²⁹ La identificación moderna entre Estado y Nación tiene sus inicios durante los siglos XV y XVI. Posteriormente se plantea la necesidad de un sustento jurídico para los nuevos Estados nación, la cual queda saldada con codificación monolingüe napoleónica .

homogéneo era un Estado moderno. No es casual que muchas de las lenguas oficiales de los OS a nivel mundial sean las otrora impuestas por las antiguas potencias coloniales.

Además, cuando decimos, por ejemplo, que el español es lengua oficial de los OS no podemos dejar de preguntarnos qué español. Claramente, en los casos estudiados, será un español sudamericano, pero cuál de todas sus variedades: rioplatense, andina o chilote, neutra, por mencionar solo algunas. Y lo mismo ocurriría si el interrogante estuviera dirigido a cualquiera de las lenguas oficiales de los OS. En este sentido argumenta Álvarez Muro, entre tanto otros:

Aclaremos que las lenguas en realidad son conceptos abstractos que no se realizan nunca en su totalidad: nadie habla la lengua española con todas sus variedades diacrónicas, diatópicas y diastráticas, sino que los hablantes realizan el sistema abstracto de la lengua en una variedad –la suya propia– que corresponde a un momento histórico, a un grupo social, a un ambiente geográfico específico. (ÁLVAREZ MURO, 2007:82)

Nos encontramos aquí frente a una problemática compleja y sumamente interesante que, lamentablemente no desarrollaremos, por razones de extensión.

Tanto a nivel nacional como supranacional, la categoría de lengua oficial supone, además, al menos formalmente, que todas las lenguas así reconocidas tienen el mismo estatus, es decir, que existe una paridad en su uso y jerarquía. Lo que nos lleva a los dos conceptos mencionados casi al inicio de esta sección: entendemos por *lengua de trabajo* aquella que se utiliza en los intercambios profesionales cotidianos, en las comunicaciones entre los funcionarios y en todo lo que compete al funcionamiento interno del OS; y, por *lengua puente o pivot*, aquella adoptada para un entendimiento común entre personas que no poseen la misma lengua materna y, más específicamente en el ámbito de la traducción, la lengua a la que primeramente se traduce un texto original, para luego tomar el texto resultante como base de futuras traducciones. Las lenguas pivot suelen coincidir con las llamadas comúnmente lenguas francas o internacionales

Como bien se manifiesta en los casos analizados, el solo hecho de que existan lenguas de trabajo o puente refuerza el estatus de ciertas lenguas oficiales por sobre otras y, por lo tanto, la disparidad entre las lenguas al interior de los organismos. El

argumento que defiende este tipo de prácticas es uno económico y operacional: es necesaria una reducción pragmática de las lenguas con las que se trabaja cotidianamente para poder disminuir costos y optimizar los tiempos de trabajo. Este es un elemento fundamental que tiene consecuencias palpables en la práctica de la traducción institucional. Ya no se sigue el modelo de traducción de uno a uno sino que la tendencia, o mejor dicho la direccionalidad de las traducciones va de un número reducido de lenguas fuente (lengua de partida) hacia un número más amplio de lenguas meta (lengua de llegada) que incluye a todas las oficiales (Pym, 2012). A esto nos referíamos en la sección *06.-Política y legislación lingüística* cuando hablábamos de las medidas que permiten a los OS con prácticas plurilingües sortear el escollo de los costos y tiempos de traducción, que aumentan exponencialmente a medida que se trabaja con un mayor número de lenguas.

Así, mientras que en la norma reina un respeto por la diversidad cultural, el pluralismo y una igualdad simbólica de las lenguas, en la práctica se manifiestan grandes asimetrías.

Un claro ejemplo de esto es lo que sucede al interior de la Unasur, donde los instrumentos jurídicos adicionales al Tratado Constitutivo, los Acuerdos que celebren los Estados miembros de Unasur, las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado, las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y las Declaraciones de las reuniones de nivel ministerial de los Consejos de Unasur se traducen a las cuatro lenguas oficiales, mientras que los demás documentos, como por ejemplo los generados por otros grupos de trabajo y los proyectos de informe de la Secretaría General sobre las reuniones (que contienen las propuestas y documentos considerados, los temas tratados, los resultados, etc.) se encuentran disponibles únicamente en las lenguas de trabajo. Así lo manifiesta, por ejemplo, la Disposición del Consejo de Delegadas y Delegados de Unasur (CD) N° 01/2012 que, entre otras acciones, aprueba la Creación del Centro de Comunicación e Información, área que – como veremos más adelante– nuclea los servicios de traducción e interpretación:

En una primera etapa, se dará prioridad a los idiomas de trabajo de la organización para la preparación, divulgación y registro de los documentos oficiales que se

generen en los órganos e instancias sectoriales de la organización. (Unasur, Disposición CD N° 01/2012)³⁰

Si bien la normativa de este OSS no es clara sobre la lengua original en la que se redactan los documentos, el Reglamento General establece que:

Los actos normativos que sean aprobados en cualquier reunión de UNASUR, deberán ser rubricados por los representantes de los países en los idiomas en que se redactaron para su ulterior traducción a los demás idiomas oficiales. Los actos normativos aprobados por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR serán aprobados en los cuatro idiomas oficiales. (Unasur, Reglamento General, Artículo 70)³¹

No es descabellado suponer que “los idiomas en que se redactaron” corresponden a una de las lenguas de trabajo.

Además, se establece que:

Las reuniones de los órganos y demás instancias de UNASUR, serán conducidas en dichos idiomas de trabajo, a excepción de las reuniones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y las reuniones ministeriales de los Consejos de UNASUR que contarán con interpretación en los cuatro idiomas oficiales de UNASUR. (Unasur, Reglamento General, Artículo 64)

El reglamento deja algunas dudas: no explicita en qué lengua se redactan las actas y demás documentos complementarios de las reuniones ni tampoco si las mismas se traducen a las demás lenguas oficiales.

En tanto que, en el caso del Mercosur, esta cuestión se vuelve mucho más clara. Como mencionamos previamente, de las tres lenguas oficiales solo el español y el portugués son también lenguas de trabajo. Excepto en el ámbito del Parlasur donde

³⁰ Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DISPOSICION_CD_UNASUR_No_01_2012.pdf?noderef=fea95948-8dc8-4493-a1cc-a1db7dc88f5e (u.f.c.: 29/05/201).

³¹ Todas las citas a este texto incluidas en el presente trabajo fueron tomadas de la versión disponible en: https://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/reglamento_gral.pdf (u.f.c.: 12/04/2018).

todas las lenguas oficiales gozan de este estatus. En cuanto a las Actas de las reuniones de sus órganos decisorios, la Resolución del Grupo del Mercado Común (GMC) N° 26/01 modificada por Res. GMC N° 08/05 establece en su Anexo I que:

Las Actas de las reuniones de los órganos del MERCOSUR serán redactadas en el idioma del Estado Parte en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore. La presente disposición no se aplica a la documentación que integra el Acta, que podrá ser anexada en portugués, español, o en otro idioma según correspondiere, ni a las normas y proyectos de normas que serán siempre redactadas en los términos del Artículo 3 de la presente Resolución. (Mercosur, Res. GMC N° 26/01)³²

El mencionado Artículo 3 establece que las normas y proyectos serán elaborados en ambas lenguas oficiales y que, excepcionalmente, los anexos que los acompañen podrán constar solo en una de las dos lenguas o en una tercera.

En este punto constataremos si lo establecido por la normativa se evidencia en la información pública que nos ofrecen los sitios web oficiales. Respecto de la Unasur, el sitio <http://www.unasursg.org> cuenta con versiones en español e inglés (lenguas de trabajo). Encontramos que, en líneas generales, la información provista en la primera es más extensa y detallada en prácticamente todas sus secciones. Lo que es más curioso aún, la versión española no solo dispone en su página principal de un acceso directo (con posibilidad de descarga) a los documentos constitutivos del OSS, como son el Tratado y el Reglamento General y su Protocolo Adicional –opción ausente en la versión inglesa–, sino que también, desde la sección “Documentos Normativos”, se puede acceder al Repositorio Digital Unasur, sistema que nos permite hacer una búsqueda avanzada de todos los documentos aprobados hasta la fecha, visualizarlos y descargarlos. En tanto que la misma sección en la versión inglesa nos ofrece únicamente acceso a los documentos constitutivos y a los Estatutos de los Consejos Ministeriales y Sectoriales aunque, para nuestra sorpresa, disponibles solo en español. Tampoco existe un repositorio de documentos normativos en lengua inglesa. Este es un marcado ejemplo de la disparidad entre las lenguas, incluso entre lenguas de trabajo. Aunque aquí, sorpresivamente, tiene preminencia el español por sobre el inglés, en

³² Ídem nota 13 (u.f.c.: 12/04/2018).

contraposición a la tendencia mundial. Esto seguramente se debe a la mayoría de países hispanohablantes que conforman el OSS. De más está decir que no existen versiones disponibles de ninguno de los textos normativos en las demás lenguas oficiales (portugués y neerlandés).

Lo curioso es que existe en efecto un Manual de procedimientos e imagen institucional para las reuniones oficiales y comunicaciones de la Unasur, aprobado por Resolución del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores (CMRE) N° 17/2012, que en su artículo 3.13 especifica los lineamientos para su página web no haciendo mención alguna de la cuestión de las lenguas.

En contraposición, el sitio web oficial del Mercosur, <http://www.mercosur.int/> (cuyo mantenimiento y actualización están a cargo de la Secretaría del Mercosur, mismo órgano del que dependen los servicios de traducción), presenta versiones en español y portugués, las cuales mantienen una paridad en cuanto a su tamaño, mapa del sitio e información disponible. Además, desde ambas versiones se pueden acceder a, visualizar y descargar todos los documentos normativos publicados en el Boletín Oficial en las lenguas correspondientes e incluso permiten realizar una búsqueda avanzada de normativa. No se encuentran disponibles las versiones de los documentos en lengua guaraní. Encontramos que lo observado en el sitio se condice con las “Directrices para armonizar los criterios utilizados en el diseño de los sitios web de los órganos y foros del Mercosur” aprobada por Res. GMC N° 06/08, que establece en referencia a las lenguas disponibles:

Tanto las páginas como los menús deben estar en español o portugués, dependiendo del idioma definido por el usuario. Incluso los logos serán diferentes de acuerdo al idioma. (Mercosur, Res. GMC N° 06/08)³³

En tanto que si visitamos el sitio web oficial del Parlamento del Mercosur (<https://www.parlamentomercosur.org/>), con versiones disponibles en español y portugués, a simple vista pareciera que ambas versiones mantienen una cierta paridad. Sin embargo, a medida que descendemos algunos niveles en la estructura del sitio, encontramos que la versión española ofrece más información y disponibilidad de visualización y descarga de documentos que su contraparte portuguesa. Por ejemplo, en

³³ Ídem nota 13 (u.f.c.: 14/05/2018).

la sección “Parlamento” → “Organigrama”, donde el organigrama está disponible solo en español; o en la sección “Parlamento” → “El Parlamento y usted”, donde la versión española presenta un tercer nivel de opciones de acceso (“Correo del ciudadano”, “Peticiones”, “Visitas al Parlamento”, “El Parlamento a su alcance”) que están ausentes en la versión portuguesa. Otras secciones de la versión portuguesa ofrecen la descarga de documentos, aunque solo en español, por ejemplo, los correspondientes a los presupuestos anuales aprobados. Por último, en “Buscador de Actos del Parlamento del Mercosur” observamos una marcada preminencia cuantitativa de los textos normativos disponibles en español.

08.- Servicios de traducción

Ahora nos dedicaremos a la cuestión de cómo se insertan los servicios de traducción en la estructura institucional de los OSS. Actualmente en el Mercosur, los servicios de traducción se encuentran bajo la órbita de la Secretaría del Mercosur, más específicamente del denominado Sector de Apoyo (SAP), uno de los ocho sectores que la integran.³⁴ Le corresponde realizar, con el apoyo del Sector de Normativa, Documentación y Divulgación y en coordinación con los Estados parte, “las traducciones auténticas” a las lenguas oficiales de todos los proyectos de norma, así como de los textos finales de las normas aprobadas. También realiza la traducción de otros textos a pedido del Director de la Secretaría o de los órganos decisorios. Cabe mencionar que ésta no es la única función del Sector; también brinda servicios informáticos y administrativos generales. En tanto que corresponde al mencionado Sector de Normativa, Documentación y Divulgación revisar las versiones en las lenguas oficiales y asegurar la correspondencia de los textos, desconocemos quiénes son los agentes que realizan esta tarea dentro del sector o con qué tipo de formación cuentan.

En referencia al Parlasur, encontramos que existe una oficina de Taquigrafía, Traducción y Desgrabación dentro del área de Documentación de la Secretaría

³⁴ Los sectores restantes son: el Sector de Administración, el Sector de Asesoría Técnica, el Sector de Informática, el Sector de Normativa, Documentación y Divulgación, la Unidad Técnica de Estadísticas de Comercio Exterior del Mercosur, la Unidad Técnica de Cooperación Internacional y la Unidad Técnica de Educación. Disponible en http://www.mercosur.int/innovaportal/v/48/2/innova.front/secretaria_del_mercosur (u.f.c.: 19/04/2018).

Parlamentaria. No hemos hallado información oficial disponible sobre la composición y tareas que desarrolla esta dependencia ni sobre su relación con el Sector de Apoyo, si es que existe.

Por su parte, en el ámbito de la Unasur los servicios de traducción están a cargo del Centro de Comunicación e Información (CCI), que depende de la Secretaría General. A éste le corresponde, entre otras funciones, realizar la traducción a las cuatro lenguas oficiales de los documentos emanados del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y, a las lenguas de trabajo, de los documentos generados por el Consejo de Delegados y demás grupos de trabajo.

Observamos que en ambos casos no existe una dependencia dentro de los OSS que se encargue exclusivamente de la actividad traductora, ésta convive con otras tantas actividades que realizan el SAP y el CCI. Sorprende que la traducción de documentos normativos esté a la par de servicios secundarios como teleconferencia, proyección, asistencia protocolar o fotocopiado. Dicho esto, cabe aclarar que, en ambos casos, la información institucional disponible en este sentido es más bien escueta y no abunda en detalles sobre la composición y organización de los servicios de traducción. Si bien pudimos detectar la presencia de algunos traductores profesionales en las nóminas de las Secretarías y constatamos que han existido convocatorias³⁵ para la contratación de traductores, no constan los nombres de los traductores y/o personas que desarrollan esta actividad.

De entre los escasos datos que pudimos recoger de los documentos del Mercosur encontramos que la Res. GMC N° 92/00 autoriza la contratación temporal (por un período de seis meses) de los servicios de un traductor a horario completo “para asistir en la conclusión del proceso de traducción, para los idiomas español y portugués de las normas aprobadas en el MERCOSUR”, contratación confirmada en el presupuesto de la entonces Secretaría Administrativa para el año 2001, siendo este el único caso registrado en los presupuestos. Desconocemos si la intención era que el profesional contratado se sumara para “asistir” a los traductores que ya estaban trabajando en ese sector o si, y nos inclinamos por esta alternativa, ante la inexistencia de traductores entre el personal propio y ante la necesidad de traducir y/o revisar las versiones de los documentos ya aprobados, se recurrió a esta contratación temporal.

³⁵ Cfr. http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8641/2/innova.front/convocatoria-n%C2%B005_18:-tecnico-para-el-sector-de-apoyo-en-la-secretaria-del-mercotur (u.f.c.: 25/09/18).

En tanto que los presupuestos de la misma Secretaría entre los años 2004 y 2009 incluyen en el rubro “Previsión de otros gastos” un pequeño monto (en ningún caso superior a USD 2.000)³⁶ destinado a “traducciones”. En los presupuestos posteriores este ítem presenta un valor de cero o directamente no figura.

Por su parte, en los presupuestos de la Secretaría General de Unasur para los años 2011-2012 y 2013, bajo el rubro “Gastos de actividades” figuran gastos considerables en concepto de interpretación simultánea (USD 310.000 y USD 115.000 respectivamente) y traducción (USD 109.000 y USD 9.450 respectivamente). Más tarde, en la Res. N° 09/2015 que aprueba la planta de cargos de personal de la Secretaría, vemos que figuran en la nómina cargos correspondientes a un “traductor jefe” y dos “traductores” más. A partir de allí, ya no figuran gastos de traducción o interpretación en el rubro “Gastos de actividades” o similares. Los presupuestos correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 mantienen estos cargos, aunque ahora se especifica que, dentro de la Secretaría, corresponden al área del CCI. En tanto que el presupuesto para el año 2014 no se encuentra lo suficientemente desglosado como para extraer información relevante. Los datos recolectados nos llevarían a suponer, en el mejor de los casos, que en un primer momento los servicios de traducción e interpretación fueron tercerizados hasta que la Secretaría General contó con recursos humanos suficientes para hacerse cargo.

Sobre la cuestión relacionada con el origen de las traducciones, la normativa del Mercosur genera ciertas dudas. Por un lado, la Res. GMC N° 37/98 sobre Traducción de la Normativa Mercosur establece que:

Los proyectos de normativa MERCOSUR [Directivas, Resoluciones y Decisiones] deberán ser elevados a la consideración de los órganos decisorios que corresponda en sus versiones en portugués y español, debiendo los foros técnicos asegurar la fiel correspondencia entre las dos versiones. (Mercosur, Res. GMC N° 37/98)³⁷

Si bien no se menciona explícitamente la figura del traductor, suponemos que éste forma parte de los denominados “foros técnicos”. En contraposición, la Res. GMC N° 26/01 sobre Actas y Documentos del Mercosur establece que:

³⁶ Actualmente ese monto equivaldría a la traducción de aproximadamente 100 páginas, lo que no parece significativo para el flujo de trabajo del Mercosur.

³⁷ Ídem nota 13 (u.f.c.: 15/05/2018).

Las normas y los proyectos de normas serán elaborados en las versiones en portugués y español, correspondiendo a los órganos responsables de su elaboración o aprobación, según sea el caso, asegurar el igual sentido de las dos versiones [...] En el caso de los proyectos de normas, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR procurará verificar el igual sentido de las dos versiones, con anterioridad a la reunión que los aprobará, proponiendo a la Presidencia Pro Tempore las correcciones que fueran necesarias. (Mercosur, Res. GMC N° 26/01)³⁸

Esto indicaría que la traducción, al menos inicialmente, quedaría en manos de los funcionarios y solo posteriormente intervendría la Secretaría en la corrección de los textos. Se presentan casos en los que los textos normativos son aprobados con errores en alguna de sus dos versiones, por lo que se procede a una fe de erratas. Es el ejemplo de la Res. GMC N° 08/07, en cuyo encabezado se lee: “Corrección de la versión en español del ‘manual de procedimientos [...]’ aprobado por Res. GMC N° 05/06”. Aquí se detectó un “error material” en la versión en español del manual un año después su sanción, por lo que fue “imprescindible salvar el error constatado” mientras que “la versión en portugués del mismo documento es correcta, siendo necesario armonizar ambas versiones”.

Por último, en el caso del Parlasur la normativa establece que:

Todos los documentos del Parlamento serán redactados en los idiomas oficiales del Mercosur establecidos en los artículos 17 y 46 del Tratado de Asunción y del Protocolo de Ouro Preto, respectivamente, elaborados por un servicio de traducción, bajo responsabilidad de la Mesa Directiva. (Mercosur, Reglamento Interno del Parlamento del Mercosur, Artículo 159)³⁹

Llama la atención el uso de artículo indefinido “un” para designar al servicio de traducción a cargo de la redacción de los documentos del Parlasur. Si bien las partidas presupuestarias indican que el OSS contaría con un servicio propio, podría leerse entre líneas que éste no se utiliza en todos los casos, sino que algunas traducciones serían encargadas a otros servicios, tercerizando la actividad.

³⁸ Ídem nota 13.

³⁹ Ídem nota 13.

Luego del estudio, quedan sin resolver numerosos interrogantes como, por ejemplo: ¿cuenta el Mercosur con un equipo de traductores de carrera? ¿La traducción de normativa en los OSS es realizada en todos los casos por traductores profesionales o en algunos casos se confía en la competencia en idiomas que puedan tener otros funcionarios del OSS o los representantes de los países miembro? ¿Si es que se contrata efectivamente a profesionales externos para proveer servicios de traducción específicos, con qué frecuencia ocurre, en qué casos particulares y qué proporción de trabajo se les asigna? Además de la normativa y demás documentos oficiales, ¿qué otros textos se traducen? ¿Cuál es el criterio adoptado para su selección? Y ¿quién toma las decisiones en este sentido? Por último, ¿Los traductores de los OSS trabajan con herramientas de traducción asistida por computadora (TAC)? ¿Existen bases de datos terminológicas u otro tipo de herramientas léxicas de apoyo a la traducción?

09.- Conclusiones

En términos generales, podemos concluir que en los OSS existe cierto desarrollo normativo (mayor en el caso del Mercosur) que permite ubicar sus políticas lingüísticas, a partir de la discusión teórica, dentro del llamado plurilingüismo. Estas políticas se encuentran ligadas discursivamente a expresiones en favor del respeto por la diversidad cultural de los pueblos y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

Sin embargo, en ambos casos se trata de un plurilingüismo limitado a las lenguas declaradas oficiales por los Estados nacionales y que ni siquiera las incluye en su totalidad (ya hemos hablado del caso boliviano con sus 36 lenguas oficiales). La limitación se vuelve mayor cuando consideramos la elección de lenguas oficiales vs. lenguas de trabajo, donde es evidente que, en el segundo caso, prevalecen las lenguas internacionales. Esta tendencia normativa reproduce la disparidad entre lenguas dominantes y dominadas que tiene su origen a nivel nacional y que se encuentra firmemente instalada a nivel global. Es decir que, entre las lenguas, incluso entre las oficiales, existe un trato desigual aun cuando discursivamente se garantiza cierta paridad.

Por otro lado, los textos normativos que refieren a la traducción institucional y a quienes llevan a cabo esta actividad son más escasos y en ocasiones presentan contradicciones o ausencias como lo manifiestan los interrogantes no resueltos al final de la sección *08.-Servicios de traducción*. De ello se desprende que la política lingüística específicamente referida a la traducción institucional se vuelva difusa. Resulta difícil aquí creer que detrás de esta indefinición no se encuentra todavía latente la idea de lenguas transparentes y de traducción como simple trasvase mecánico.

Se destacan dos consecuencias principales: 1) la falta de información completa y disponible sobre los recursos (humanos y materiales) reales que se asignan a la actividad traductora y 2) las dificultades en el acceso a la información y los documentos oficiales por parte de los ciudadanos que no hablan las lenguas de trabajo, lo que afecta su capacidad de acceder a los mecanismos de participación. Hecho constatado mediante el relevamiento de los sitios web institucionales.

Asimismo, el análisis comparativo arrojó diferencias entre el Mercosur y la Unasur que, entendemos, se deben principalmente a la edad de cada OSS (el Mercosur con sus casi treinta años respecto de la Unasur con menos de una década) y al consecuente desarrollo institucional que han podido alcanzar. El relevamiento de la normativa reveló que, si bien ninguno de los dos carece de legislación lingüística, en términos cuantitativos son más numerosos los documentos que refieren a la política lingüística del Mercosur que de la Unasur. A esto se suma que, al momento de entrega de este trabajo, seis países miembro (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) habían decidido suspender su participación en la Unasur por tiempo indefinido. El análisis de las eventuales consecuencias –de producirse alguna en el futuro– de este hecho en la problemática investigada quedará supeditado a reflexiones posteriores.

En cuanto a la comparación con los organismos tomados inicialmente como referencia, creemos que el hecho de que exista un mayor y más acabado tratamiento de la política y la legislación lingüísticas en torno a la traducción en la Unión Europea y en las Naciones Unidas no quiere decir que la mejor alternativa para nuestros procesos regionales sea imitar procesos ajenos. Aquellos organismos tienen un largo recorrido histórico y en ellos confluyen constelaciones de lenguas oficiales y no oficiales a la par de las comunidades que las sustentan. Es cierto, el problema de que casi no existan desarrollos teóricos disponibles sobre la traducción en los OSS no ayuda a la reflexión. A lo largo de la investigación encontramos que el material disponible sobre traducción

se enfoca mayormente en cómo los procesos de integración regional en América del Sur ligados al desarrollo de los OSS, especialmente del Mercosur, han afectado y modificado la industria y el mercado de la traducción o la oferta académica de carreras de traducción. Enfoques que solo rozan la problemática aquí planteada.

Quizás una alternativa más beneficiosa y posiblemente más efectiva que la simple repetición de estrategias sea generar políticas que tomen como referencia lo que ya se ha hecho en otras latitudes pero adaptándolo para responder a la propia situación coyuntural.

Como se puede apreciar, el debate es amplio y el presente trabajo de ninguna manera ha agotado todos sus aspectos ni resuelve todos los interrogantes que se desprenden. Más bien se ofrece como una suerte de puntapié inicial que invita a reflexionar sobre traducción. La invitación ya está hecha.

Bibliografía

ÁLVAREZ MURO, Alexandra (2007). *Textos sociolingüísticos*. Venezuela: Universidad de los Andes.

BEIN, Roberto (2004). “La legislación político-lingüística en la Argentina”, en G. Kremnitz & J. Born, *Lenguas, literaturas y sociedad en la Argentina*. Viena: Praesens. Pág. 41-50.

- (2008). “Política y legislación lingüística” en *Signos universitarios virtual*, año II, n° 3. Disponible en <https://ecaths1.s3.amazonaws.com/politicalinguistica/289850083.BEIN%20Pol%C3%ADtica%20y%20legislaci%C3%B3n%20ling%C3%BC%C3%ADsticas.docx> (u.f.c.: 21/02/2018).

- (2012). Presentación de la Mesa: “Políticas lingüística y legislación” en *Libro de Actas del Congreso Regional de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura. Cultura Escrita y Políticas Pedagógicas en las Sociedades Latinoamericanas Actuales*. Biblioteca Nacional – Universidad Nacional de General Sarmiento. Pág. 428-434.

BIGOT, Margot (2010). *Apuntes de lingüística antropológica*. Centro Interdisciplinario de Ciencias Etnolingüísticas y Antropológico-Sociales de la UNR. Disponible en <http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1367> (u.f.c.: 06/02/2018).

BOCHMANN, Klaus y SEILER, Falk (2010). “Conflicto lingüístico y políticas lingüísticas”. Texto fuente: www.saw-eipzig.de/sawakade/10internet/sprachwi/bochmann1.html Traducción de Mariana Lanusse para la cátedra Sociología del Lenguaje (UBA). Disponible en: <http://www.linguasur.com.ar/panel/archivos/343ec5991d9b7147fcbd24f3ac074f06Klaus%20Bochmann%20SP.pdf> (u.f.c.: 26/11/2015).

BOGADO BORDAZAR, Laura Lucía (2016). “Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)” en CONSANI, R. (Comp.) et al., *Manual: nuevos desarrollos del derecho internacional*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pág.: 94-108.

BONO, Laura & BOGADO BORDAZAR, Laura Lucía (2014). “El MERCOSUR y la UNASUR: ¿Dos experiencias de integración con objetivos convergentes?” Presentado en Conferencia FLACSO-ISA, Buenos Aires, 23-25 de julio de 2014. Centro de Estudios Sudamericanos. Disponible en http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/46/art_bono_bogado.pdf (u.f.c.: 06/12/2017).

BOURDIEU, Pierre (2001). *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*. Madrid: Akal.

CALVET, Louis-Jean (1997). *Las políticas lingüísticas*. Versión castellana de Lía Varela. Buenos Aires: Edicial.

CARRIÓN MENA, Francisco (2013). “Unasur: ¿simple retórica o regionalismo efectivo? Fortalezas y debilidades”. Quito: Friedrich-Ebert-Stiftung-ILDIS. Disponible en <http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2013/13610.pdf> (u.f.c.: 12/04/2018)

CHAREILLE, Samantha (2004). “Regionalización de los mercados y mercados de lenguas: el caso del Mercosur y Chile” en *Literatura y Lingüística*, N° 15, págs: 157-181.

CONTURSI, María Eugenia (2010). “Legislación político-lingüística del MERCOSUR: avances y dilaciones a casi dos décadas del Tratado de Asunción” en *Libro de Actas del Congreso Regional de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura. Cultura Escrita y Políticas Pedagógicas en las Sociedades Latinoamericanas Actuales*. Biblioteca Nacional – Universidad Nacional de General Sarmiento. Pág. 443-453.

COULTHARD, Malcolm (1985). *An Introduction to Discourse Analysis*. Londres/Nueva York: Longman.

DEL VALLE, José y MEIRINHO-GUEDE, Vitor (2016). “Ideologías lingüísticas” en Gutiérrez-Rexach, J. (Ed.) *Enciclopedia Lingüística Hispánica*, vol. II. Nueva York: Routledge. Pág. 622-631.

DI MASI, Jorge (2016) “Nuevos desarrollos del Derecho Internacional Económico: Del multilateralismo a los acuerdos preferenciales bilaterales y regionales” en CONSANI, R. (Comp.) et al., *Manual: nuevos desarrollos del derecho internacional*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pág.: 31-36.

FERGUSON, Charles (1959). “Disglossia” en *Word*, vol. 15, Pág. 325-340.

FERNÁNDEZ-MIRANDA, María Elena (1996). “La traducción en las instituciones europeas y en las organizaciones internacionales” en *Hieronymus Complutensis*, Nº 4-5, Pág. 87-100.

GARCÍA, Irene (2015). *La traducción y la Interpretación en la Organización de las Naciones Unidas*. Trabajo de fin de grado de la Carrera de Grado en Traducción e Interpretación, Universidad de Valladolid. Disponible en <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13676/1/TFG-O%20572.pdf> (u.f.c.: 12/04/2018).

GIANELLA, Alicia (1995). *Introducción a la Epistemología y a la Metodología de la Ciencia*. La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.

HAMEL, Rainer Enrique (1995). “Derechos lingüísticos como derechos humanos: debates y perspectivas” en *Alteridades*, Nº 5 (10), Pág. 11-23.

-(1997). “Introduction: Linguistic human rights in a sociolinguistic perspective” en *International Journal of the Sociology of Language*, Nº 127, Pág. 1-24.

HURTADO ALBIR, Amparo (2007). *Traducción y Traductología* (3ra Ed.). Madrid: Cátedra.

JAKOBSON, Roman (1981). *Ensayos de lingüística general* (2da Ed.). Barcelona: Seix Barral.

LE PAGE Robert B. y TABOURET KELLER, Andrée (1985). *Acts of Identity. Creole-based approaches to language and ethnicity*. Cambridge: Cambridge University Press.

LOPESTI, Roberto Pedro (1997). *Constituciones del Mercosur*. Buenos Aires: Ediciones Unilat.

MAR-MOLINERO, Clare (2000). *The Politics of Language in the Spanish-Speaking World. From colonisation to globalisation*. Londres: Routledge.

MELIÀ, Bartomeu (2010). “El idioma guaraní y la realidad multicultural del MERCOSUR”, en Rodrigues, J.M. (org.), *Diversidad, Interculturalidad y Educación en el Brasil y Paraguay*. Asunción: CEADUC. Pág. 173-198.

MYSKJA, Kjetil (2013). “Foreignisation and resistance: Lawrence Venuti and his critics” en *Nordic Journal of English Studies*, Nº 12(2), Pág. 1-23.

NARVAJA DE ARNOUX, Elvira (2010). “Representaciones sociolingüísticas y construcción de identidades colectivas en el Mercosur” en Celada, M.; Fanjul, A. & Nothstein, S. (Coord.), *Lenguas en un espacio de integración*. Buenos Aires: Editorial Biblos. Pág. 17-38.

NOUBLEAU ORANTES, Pedro *et al.* (1993). *Los organismos supranacionales opcion para la integración centroamericana*. Trabajo de fin de grado de la carrera de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad Centroamericana “Jose Simeon Cañas”. Disponible en http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/0/e016dc7803c36c8b06256b3e00747_a73?OpenDocument (u.f.c.: 24/04/2018).

NUÑEZ POBLETE, Manuel (2008). “Introducción al concepto de identidad constitucional y a su función frente al derecho supranacional e internacional de los derechos de la persona”, en *Revista Ius et Praxis*, año 14, Nº 2, pág. 331-372.

OYARZÚN SERRANO, Lorena (2008). “Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y debates” en *Revista de Ciencia Política* (Santiago), vol. 28, Nº 2, pág. 95-113.

PAYÀS PUIGARNAU, Gertrudis (2010). *El revés del tapiz: Traducción y discurso de identidad en la Nueva España (1521-1821)*. Madrid: Iberoamericana.

PINZÓN DAZA, Sandra Liliana (2005). “Lenguaje, lengua, habla, idioma y dialecto” en *Revista La Tadeo* Nº 71, pág. 9-21.

PYM, Anthony (2000). “The European Union and its Future Languages. Questions for Language Policies and Translation Theories”, *Accross Languages and Cultures*, 1:1-18.

-(2001). “The Use of Translation in International Organizations”. Presentado en el taller “Translation and Institutions” del SLE Congress, Leuven, agosto 2001. Disponible en <http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/translation/transinst.html> (u.f.c.: 12/04/2018).

-(2012) *Teorías contemporáneas de la traducción. Materiales para un curso universitario*. 2^{da} ed., revisada. Trad. Noelia Jiménez, Maia Figueroa, Esther Torres, Marta Quejido, Anna Sedano, Ana Guerberof, Helena Romero López, Melisa Monaco. Tarragona: Intercultural Studies Group. Disponible en https://www.researchgate.net/profile/Anthony_Pym2/publication/266557109_Teorias_contemporaneas_de_la_traduccion/links/5750919908ae1c34b39c296b/Teorias-contemporaneas-de-la-traduccion.pdf (u.f.c.: 03/05/2018)

-(2013). “Translation as an Instrument for Multilingual Democracy” en *Critical Multilingualism Studies*, 1:2, Pág. 78-95.

RODRÍGUEZ, Gabriela (1999). “Derecho internacional y globalización” en *Insomnia*, Nº 11, Pág. 23-32.

TAFALLA PLANA, Montserrat (2010). “El Multilingüismo en la Organización de las Naciones Unidas” en *Revista de Llengua i Dret*, Nº 53, Pág. 137-162.

VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (coord.) (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.

VENUTI, Lawrence (2004). *The Translator's Invisibility. A history of translation*. Reino Unido: Taylor & Francis e-Library. Disponible en <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.4973&rep=rep1&type=pdf> (u.f.c.: 03/05/2018)

VIEIRA POSADA, Edgar (2005). “Evolución de las teorías sobre integración en el contexto de las teorías de Relaciones Internacionales” en *Papel Político*, Nº 18, Pág. 235-290.

Documentos normativos consultados

(1948) Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Recuperada de <http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/> (u.f.c.: 26/05/2018)

(1969) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. U.N. Doc. A/CONF.39/27. Disponible en https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf (u.f.c.: 12/04/2018)

(1996) Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Lingüísticos de Barcelona. Recuperada de <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001042/104267S.pdf> (u.f.c.: 26/05/2018)

MERCOSUR:

(1991) Tratado para la constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay - Tratado de Asunción. Disponible en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf (u.f.c.: 12/04/2018)

(1994) Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur - Protocolo de Ouro Preto. Disponible en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/721/1/1994_protocoloouropreto_es.pdf (u.f.c.: 12/04/2018)

(2005) Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. Montevideo. Disponible en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/1104/1/2005_protocoloparlamentomcs_es.pdf (u.f.c.: 12/04/2018)

(2007) Reglamento Interno del Parlamento del Mercosur. Montevideo. Disponible en https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/7307/1/reglamento_interno_-_es.pdf (u.f.c.: 12/04/2018)

Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) N° 30/02 – Transformación de la Secretaría Administrativa del Mercosur en Secretaría Técnica. Disponible en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/48/1/dec_030-2002_es_transf-sam-a-secretaria-tecnica_acta-2_02.pdf (u.f.c.: 19/04/2018)

Decisión CMC N° 49/04 - Parlamento del Mercosur. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 14/05/2018)

Decisión CMC N° 35/06 - Incorporación del guaraní como idioma del Mercosur. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 14/05/2018)

Decisión CMC N° 07/07 - Estructura y Funcionamiento de la Secretaría del Mercosur. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 12/04/2018)

Decisión CMC N° 47/08 - Grupo de Alto Nivel sobre la Relación Institucional entre el Consejo del Mercado Común y el Parlamento del MERCOSUR. Disponible en

<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 12/04/2018)

Resolución del Grupo del Mercado Común (GMC) N° 37/98 – Traducción de la normativa Mercosur. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 86/00 - Presupuesto de la SAM para el ejercicio 2001. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 92/00 - Estructura de la Secretaría Administrativa del Mercosur. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 12/05/2018)

Resolución GMC N° 26/01 - Actas y Documentos del Mercosur. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 12/04/2018)

Resolución GMC N° 15/02 - Estructura y manual de cargos y funciones de la Secretaría Administrativa del Mercosur. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 14/05/2018)

Resolución GMC N° 48/03 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2004. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 39/04 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2005. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 62/05 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2006. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 63/06 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2007. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 08/07 - Corrección de la versión en español del “Manual de procedimientos de coordinación de frecuencias en la banda de 1.710 MHz a 1.990 MHz y de 2.100 MHz a 2.200 MHz” - RES. GMC N° 05/06. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 14/05/2018)

Resolución GMC N° 54/07 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2008. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 06/08 - Directrices para armonizar los criterios utilizados en el diseño de los sitios web de los órganos y foros del Mercosur. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 14/05/2018)

Resolución GMC N° 70/08 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2009. Disponible en [http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/](http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa) búsqueda-de-normativa (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 34/09 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2010. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 55/10 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2011. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 28/11 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2012. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 47/12 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2013. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 48/13 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2014. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 03/14 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2015. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 56/15 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2016. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 30/16 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2017. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Resolución GMC N° 47/17 - Presupuesto de la Secretaría del Mercosur para el ejercicio 2018. Disponible en <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa> (u.f.c.: 15/05/2018)

Disposición del Parlamento del Mercosur (PM) N° 02/2014 que aprueba el Convenio de cooperación entre el Parlamento del Mercosur y la Secretaría de Políticas Lingüísticas de la República del Paraguay del 7 de marzo de 2014. Disponible en <https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/8263/1/disp-02-2014---convenio-marco.pdf> (u.f.c.: 12/04/2018)

Recomendación PM N° 01/2009 que solicita al Consejo del Mercado Común declarar al guaraní como idioma oficial del Mercosur. Disponible en <https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/7354/1/rec-01-2009-guarani---idioma-oficial.pdf> (u.f.c.: 12/04/2018)

UNASUR:

(2008) Tratado Constitutivo de la Unión de las Naciones Suramericanas. Celebrado en Brasilia. Disponible en <https://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf> (u.f.c.: 12/04/2018)

(2012) Reglamento General. Disponible en https://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/reglamento_gral.pdf (u.f.c.: 12/04/2018)

Resolución Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores (CMRE) N° 01/2012 - Presupuestos de Unasur 2011-2012. Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CD_P_RESOLUCION_No_01_2012_PRESUPUESTO_DE_UNASUR_2011___2012.pdf?nodeRef=28441b68-3a5e-4c70-b92f-5e1cf77be820 (u.f.c.: 29/05/2018)

Resolución CMRE N° 02/2012 - Presupuesto anual de funcionamiento de Unasur: Secretaría General de Unasur 2013 y de las iniciativas comunes 2013. Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CD_P_RESOLUCION_No_02_2012_PRESUPUESTO_ANNUAL_DE_FUNCIONAMIENTO_DE_UNASUR_SECRETARIA_GENERAL_DE_UNASUR_2013_Y_DE_LAS_INICIATIVAS_COMUNES_2013.pdf?nodeRef=b1acfd0d-dea7-4871-b015-cf416bb90073 (u.f.c.: 29/05/2018)

Resolución CMRE N° 17/2012 - Manual de procedimientos e imagen institucional para las reuniones oficiales y comunicaciones de la Unasur. Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_17_2012_MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS_E_IMAGEN_INSTITUCIONAL_PARA_LAS_REUNIONES_OFICIALES_Y_COMUNICACIONES_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS.pdf?nodeRef=468339a4-1f62-4aa9-9ed0-0d8f024d3dba (u.f.c.: 29/05/2018)

Resolución CMRE N° 08/2015 - Planta de cargos de personal de la Secretaría General de Unasur. Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_08_2015_PLANTA_DE_CARGOS_DE_PERSONAL_DE_LA_SECRETARIA_GENERAL_DE_UNASUR.pdf?nodeRef=91cf0046-0241-4b5e-99be-90017721f203 (u.f.c.: 29/05/2018)

Resolución CMRE N° 09/2015 – Modificación de la Res. CMRE N° 08/2015. Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_09_2015_MODIFICACION_DE_LA_RESOLUCION_UNASUR_CMRE_No_08_2015_QUE_APRUEBA_LA_PLANTA_DE_CARGOS_DE_PERSONAL_DE_LA_SECRETARIA_GENERAL_DE_UNASUR.pdf?nodeRef=3cc046fc-b5fb-460a-b066-1b93f7ba0480 (u.f.c.: 29/05/2018)

Resolución CMRE N° 018/2015 – Presupuesto anual de Unasur para el año 2016. Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_18_2015_PRESUPUESTO_ANUAL_DE_UNASUR_PARA_EL_A%C3%91O_2016.pdf?nodeRef=9ac49f15-67a4-4de7-a7ef-35e4c8b0a55d (u.f.c.: 29/05/2018)

Resolución CMRE N° 014/2016 – Presupuesto ordinario anual de Unasur para el año 2017. Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_14_2016_PRESUPUESTO_ORDINARIO_ANUAL_DE_UNASUR_PARA_EL_A%C3%91O_2017.pdf?nodeRef=ec4d30cc-3d6c-4151-828a-27996c303819 (u.f.c.: 29/05/2018)

Resolución CMRE N° 011/2017 - Presupuesto ordinario anual de Unasur para el año 2018. Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_11_2017_APRUEBA_EL_PRESUPUESTO_ORDINARIO_ANUAL_DE_UNASUR_PARA_EL_A%C3%91O_2018.pdf?nodeRef=976604c7-9500-4a3d-a512-07ef5a55ef0d (u.f.c.: 29/05/2018)

Disposición del Consejo de Delegadas y Delegados (CD) N° 01/2012. Disponible en https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DISPOSICION_CD_UNASUR_No_01_2012.pdf?nodeRef=fea95948-8dc8-4493-a1cc-a1db7dc88f5e (u.f.c.: 29/05/2018)
